

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 1279-2010
LORETO

Lima, diez de noviembre de dos mil diez.-

VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado Mariano Cruz Ponce ó Abraham Antonio Chávez Ponce contra la sentencia anticipada de fojas catorce mil ciento cuarenta y nueve, de fecha veintidós de octubre de dos mil nueve; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Barrios Alvarado; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal; y **CONSIDERANDO:** **Primero:** Que, el sentenciado Cruz Ponce ó Chávez Ponce al fundamentar su recurso de nulidad a fojas catorce mil ciento setenta y seis, señala que la sanción impuesta de treinta y cinco años de privación de la libertad resulta excesiva, desproporcionada e incompatible con el principio de proporcionalidad de la pena y atenta contra sus derechos fundamentales, contraponiéndose a su función preventiva, protectora y resocializadora, no permitiéndole que se reinserte a la sociedad, más aún si se toma en cuenta que a la fecha tiene cincuenta y dos años de edad y que no podrá acceder a ningún beneficio penitenciario, lo que significa que cumplirá la pena impuesta cuando tenga ochenta y cinco años; que, el Colegiado Superior no ha tomado en cuenta al momento de fijar la pena, su conducta y comportamiento durante la secuela del proceso, pues ha colaborado con la administración de justicia, asumiendo su responsabilidad y mostrando una total predisposición para el esclarecimiento de los hechos, acogién dose a la conclusión anticipada del debate oral; que, por tanto, la sanción impuesta no se ajusta a la finalidad que persigue el derecho penal, lo que evidentemente le causa grave perjuicio, que deberá ser corregido por el Superior en grado; que por tales consideraciones, solicita

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 1279-2010
LORETO

la disminución del *quántum* de la pena impuesta. **Segundo:** Que, de acuerdo al dictamen acusatorio de fojas doce mil once, se atribuyó al encausado Mariano Cruz Ponce ó Abaham Antonio Chávez Ponce ser el líder de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas a nivel internacional, integrando el llamado "Cártel de Medellín", habiendo transportado droga y armamento de la zona de Monzón, Tingo María y Aguaytía, por vía terrestre hasta la ciudad de Pucallpa, de donde la trasladaba por vía fluvial hasta la localidad de Nuevo Perú - Río Putumayo - El Estrecho - Iquitos, donde se encontraba con el principal acopiador de droga para el Cártel de Medellín; asimismo, se determinó que su centro de operaciones se hallaba en la ciudad de Iquitos contando con numerosos agentes y zonas de producción de alcaloides en las localidades de Monzón, Tingo María y Aguaytía, contando con armamento, pertrechos y numerosos vehículos, así como apoyo logístico y de seguridad; siendo que al momento de su captura el día diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, había negociado la venta de armas a agentes de tráfico ilícito de drogas, habiendo intentado sobornar a los efectivos de la Policía Nacional para que lo dejen en libertad ofreciéndoles la suma de un mil quinientos dólares americanos. **Tercero:** Que, después de efectuar el análisis correspondiente se llega a determinar que en autos, el encausado Mariano Cruz Ponce ó Abraham Antonio Chávez Ponce se ha sometido a la conclusión anticipada del juicio oral, reconociendo y aceptando los cargos formulados por el Ministerio Público en su integridad, en tal sentido, este Supremo Tribunal no puede mencionar, interpretar ni valorar acto de investigación o de prueba alguna, pues el imputado expresamente aceptó los cargos y renunció a su derecho a la presunción de inocencia, a la exigencia de

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 1279-2010
LORETO

prueba de cargo por la acusación y a un juicio contradictorio, lo que fue ratificado por su abogada defensora, como se advierte del acta de sesión de audiencia de fojas catorce mil ciento cuarenta y ocho. **Cuarto:** Que al respecto, el Acuerdo Plenario número cinco – dos mil ocho / CJ – ciento dieciséis, del dieciocho de julio de dos mil ocho, refiere lo siguiente: "...Los fundamentos de hecho o juicio histórico de la sentencia, en suma, no se forman como resultado de la valoración de la prueba, sino le vienen impuestos al Juez por la acusación y la defensa, a través de un acto de allanamiento de esta última, que son vinculantes al Tribunal y a las partes. El relato fáctico aceptado por las partes no necesita de actividad probatoria, ya que la conformidad excluye toda tarea para llegar a la libre convicción sobre los hechos. Por consiguiente, el Órgano Jurisdiccional no puede agregar ni reducir los hechos o circunstancias que han sido descritos por el Fiscal en su acusación escrita y aceptados por el acusado y su defensa, pues ello implicaría revisar y valorar hechos de aportación de hechos, excluidos por la propia naturaleza de la conformidad procesal. En consecuencia, es inaceptable que el Tribunal se pronuncie sobre la no presencia de pruebas, pues la conformidad del acusado – es de insistir – supone que ha quedado fijado el elemento fáctico, sin que exista propiamente prueba al no mediar juicio derivado de la apreciación de hechos (...) Ello, además, provocaría una indefensión a las partes frente al Tribunal Sentenciador, por introducir un tema que no fue objeto de discusión, y repasar la vinculación fáctica que la institución importa...".

Quinto: Que, en el presente caso, el acusado ha renunciado a cualquier acto de valoración de la prueba, al aceptar los cargos contenidos en la acusación fiscal, a ejercer plenamente el derecho de defensa que le asistía, por tanto, no puede posteriormente a la sentencia, acoger como argumento de defensa una circunstancia de hecho que en su momento aceptó bajo las garantías de ley, en tal sentido, se debe precisar que a través de la institución procesal de la terminación anticipada, el Juzgador se encuentra habilitado para recorrer la pena en toda su extensión. **Sexto:** Que, en dicho orden de ideas, y al no estar en cuestionamiento la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 1279-2010
LORETO

responsabilidad penal del citado encausado por lo indicado precedentemente debe tenerse en cuenta que el ámbito de competencia de este Supremo Tribunal, se encuentra delimitado por los agravios formulados por el sentenciado - respecto al *quántum* de la pena - ello en virtud del principio dispositivo que rigen los recursos. **Sétimo:** Que, antes de efectuar el análisis en cuanto a la pena impuesta, debe indicarse que la conducta imputada al encausado Cruz Ponce ó Chávez Ponce ha sido tipificada en los siguientes delitos: **i)** contra la Salud Pública - tráfico ilícito de drogas (artículo doscientos noventa y seis, debidamente concordado con el inciso siete del artículo doscientos noventa y siete del Código Penal); **ii)** lavado de activos (artículo doscientos noventa y seis - B del Código Penal); **iii)** contra la Administración Pública - cohecho activo (artículo trescientos noventa y nueve del Código Penal); y, **iv)** contra la Tranquilidad Pública - tenencia ilegal de armas (artículo doscientos setenta y nueve del Código Penal) todos éstos en agravio del Estado; siendo que el primero de los ilícitos mencionados - tráfico ilícito de drogas - a la fecha de los hechos - tomando en cuenta que el delito se realizó hasta el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, fecha en la que fue capturado el precitado encausado Cruz Ponce ó Chávez Ponce - se encontraba sancionado con pena privativa de la libertad no menor de veinticinco años - así se advierte del artículo tres de la Ley número veintiséis mil doscientos veintitrés, publicada el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y tres, que estableció en el inciso siete del artículo doscientos noventa y siete del cuerpo legal tantas veces mencionado, como agravante, cuando: "...El hecho es cometido por tres o más personas o el agente activo integra una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas a nivel nacional o internacional..." -; en cuanto al delito de lavado de activos, debe indicarse que, a la fecha de los hechos, dicha conducta

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 1279-2010
LORETO

delictiva se encontraba sancionada según el artículo doscientos noventa y seis - B del Código Penal, modificado por la Ley número veintiséis mil doscientos veintitrés con pena de cadena perpetua - siendo éste el motivo por el que el Fiscal Superior solicitó dicha sanción en su dictamen acusatorio de fojas doce mil once -, sin embargo, con posterioridad se expidió la "Ley Penal contra el Lavado de Activos", Ley número veintisiete mil setecientos sesenta y cinco, de fecha veintiséis de junio de dos mil dos, que en su artículo tres "Formas agravadas" sanciona con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años cuando "...los actos de conversión o transferencia se relacionen con dineros, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o el narcoterrorismo..."; por tanto, siendo esta última norma más beneficiosa para el encausado, ésta es la que se debe invocar al momento de resolver, entendiéndose que cuando en un tipo penal no se establezca el límite punitivo máximo, se debe recurrir al artículo veintinueve del Código Penal, que señala que la pena privativa de libertad temporal tendrá una duración máxima de treinta y cinco años; finalmente, para los delitos de cohecho propio y tenencia ilegal de armas las penas previstas a la fecha de los hechos eran de no menor de tres ni mayor de cinco años de privación de la libertad, y no menor de seis ni mayor de quince años, respectivamente. **Octavo:** Que, en dicho orden de ideas, se advierte que la pena para el delito de lavado de activos es la más grave - treinta y cinco años - y, por ende, resulta ser el límite máximo a imponer en el presente caso y no la cadena perpetua como así lo dejó entrever el Colegiado Superior en la sentencia impugnada, debiendo señalarse al respecto que para la dosificación punitiva o para los efectos de imponer una sanción penal debe tenerse presente que el Legislador ha establecido las clases de pena y el quántum de éstas, por

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 1279-2010
LORETO

consiguiente, se han fijado los criterios necesarios para que se pueda individualizar judicialmente la pena y concretarla, que dentro de este contexto debe observarse el principio de proporcionalidad que nos conduce a valorar el perjuicio y la trascendencia de la acción desarrollada por el agente culpable bajo el criterio de la individualización, cuantificando la gravedad del delito y su modo de ejecución, el peligro ocasionado y la personalidad o capacidad del presunto delincuente - conforme a los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal -; que en tal sentido, se advierte que las circunstancias que acompañaron al presente evento delictivo han sido analizadas correctamente por el Tribunal Superior, toda vez que, el encausado Mariano Cruz Ponce ó Abraham Antonio Chávez Ponce resulta ser el líder de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas a nivel internacional, utilizando dinero de dicha actividad para la adquisición - por medio de terceras personas - de diversos bienes inmuebles; sin embargo, al momento de fijar la pena el Tribunal Sentenciador ha considerado que - de acuerdo a la acusación fiscal - la pena concreta a imponerse debía ser la de cadena perpetua, criterio del que discrepa este Tribunal Supremo, pues tal como se ha precisado precedentemente, la pena máxima a imponerse en el caso sub examine es de treinta y cinco años de privación de la libertad, y que en base a la forma y circunstancias en que se perpetraron los delitos materia de imputación - los que revisten una suma gravedad - dicho *quántum* debe ser en el presente caso la pena concreta a imponerse. **Noveno:** Que, añadido a lo precedentemente expuesto - donde se ha considerado como pena concreta treinta y cinco años de privación de la libertad -, se debe agregar, que este Supremo Tribunal, debe también tomar en consideración para determinar finalmente la pena a

28

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 1279-2010
LORETO

imponer en el presente caso, el Acuerdo Plenario número cinco – dos mil ocho / CJ –ciento dieciséis, del dieciocho de julio de dos mil ocho – lo que se ha realizado de manera deficiente por el Colegiado Superior - **que señala:** "...El principio de proporcionalidad que informa la respuesta punitiva del Estado, la individualización de la pena impone una atenuación menor en los supuestos de conformidad. No es lo mismo culminar la causa (...) poniéndole fin anticipadamente, que esperar su culminación y el inicio del juicio oral, como sucede en la conformidad por oposición a la terminación anticipada. En consecuencia, la reducción de la pena no puede llegar a una sexta parte, ha de ser siempre menor de ese término..."; en tal sentido, en el presente caso, es viable que a la pena impuesta por el Colegiado Superior se le disminuya una séptima parte. **Décimo:** Que, en dicho orden de ideas y efectuándose el descuento de la séptima parte a la pena concreta impuesta, se concluye que al encausado Cruz Ponce ó Chávez Ponce se le debe imponer treinta años de pena privativa de libertad. **Décimo Primero:** Que, en cuanto a la reparación civil debe referirse que el monto que se consigne en la sentencia debe encontrarse en función a la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados, debiendo existir proporcionalidad entre estos y el monto que por dicho concepto se establezca, que la indemnización cumple una función reparadora y resarcitoria de acuerdo a lo establecido en el artículo noventa y tres del Código Penal, que en dichas consideraciones se advierte que el monto fijado en la sentencia materia de grado por concepto de reparación civil se encuentra arreglado a derecho, pues ha sido establecido de manera razonable y en directa relación con el daño ocasionado, por tanto, debe mantenerse. Por estos fundamentos: declararon **NO HABER NULIDAD** en la sentencia anticipada de fojas catorce mil ciento cuarenta y nueve, de fecha veintidós de octubre de dos mil nueve, que condenó a Mariano

28

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 1279-2010
LORETO

Cruz Ponce ó Abraham Antonio Chávez Ponce por los delitos contra la Salud Pública – tráfico ilícito de drogas agravado, lavado de activos, contra la Administración Pública – cohecho activo y contra la Tranquilidad Pública – tenencia ilegal de armas, todos éstos en agravio del Estado; fijó en cien mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán pagar a favor del agraviado; con lo demás que al respecto contiene; asimismo, **HABER NULIDAD** en cuanto le impuso a Mariano Cruz Ponce ó Abraham Antonio Chávez Ponce la pena de treinta y cinco años de pena privativa de libertad, **REFORMÁNDOLA** en este extremo le impusieron treinta años de pena privativa de libertad, la misma que con el descuento de la carcelería que viene sufriendo desde el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete hasta el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y ocho, y desde el cuatro de mayo de dos mil nueve, vencerá el tres de noviembre de dos mil treinta y siete; y, los devolvieron. Interviniendo el señor Juez Supremo Calderón Castillo por licencia del señor Juez Supremo Neyra Flores.-

S.S.

RODRÍGUEZ TINEO

BARRIOS ALVARADO

BARANDIARÁN DEMPWOLF

CALDERÓN CASTILLO

SANTA MARÍA MORILLO

BA/ eamp

SE PUBLICÓ CONFORME A LEY

MIQUEL ÁNGEL SOTO TASAICO
SECRETARIO (e)
Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA



Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
PRIMERA FISCALIA SUPREMA PENAL

EXPEDIENTE N° 8079-1997
C.S. N° 1279-2010
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO
DICTAMEN N° 1432 -2010-MP-FN-1ªFSP

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

La Segunda Sala Penal permanente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, por Sentencia de fs. 14149/14158, su fecha 22 de octubre del 2009, FALLA: **CONDENANDO** a **MARIANO CRUZ PONCE o ABRAHAN ANTONIO CHAVEZ PONCE** como autor del delito contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas agravado, Lavado de dinero, Corrupción de Funcionarios y Tenencia Ilegal de Armas-, en agravio del Estado, imponiéndole **TREINTA Y CINCO AÑOS** de pena privativa de libertad, inhabilitación por cinco años, el pago de trescientos días-multa, y cien mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del Estado, y **RESERVANDO** el juzgamiento contra los acusados **MOISES ALBERTO CERCEO MASGO** o Enrique Manuel Phil Santolalla Noriega o Donald Abel Ramos López, **CARLOS RENGIFO NITIVIRI** ú Horacio Espinoza Rivera o Elmer Romero Mayta, **JOSE LEONARDO VICENTE SALAS** o José Julio Alejandro León Hartley, **SIXTO JOSE SHAPIAMA DEL CASTILLO**, **NELLY ELVIRA DEL CASTILLO LANCHA**, **JOSE LEVI SHAPIAMA CENEPO**, **ADLER USHINAHUA DEL CASTILLO**, **ISABEL DEL CASTILLO LANCHA**, **CARLOS EDUARDO SHAPIAMA DEL CASTILLO**, **GRIMALDO TAMANI SIRI**, **CARMEN SHUMELO OROCHE**, **DINA VASQUEZ CAHUAZA**, **JUAN CARLOS SALAZAR FIGUEROA**, **ELGIN CÁRDENAS SANCHEZ**, **ALEJANDRO TAYPE MEZA**, **NIXON AQUILES HUAMAN VILLALCORTA**, **KELLY DOYSI TORRES MUÑOZ**, **LISBINO VÁSQUEZ HUANCI**, **JOSE VICTOR EGUREN DIAZ**, **PEDRO SALAS PACHECO**, **MARIO FERNANDO LEÓN REQUENA**, **CARLOS RAMÓN REATEGUI ALENCAR**, **LENIN ESCURRA GARCÍA**, **CARLOS RAMON FUERTES MEZA** y **JAIR FACHIN NINACAY**.

I. FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN:

Contra la mencionada sentencia, el Colegiado a fs. 14209, concedió el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del condenado, quien

JOSE ANTONIO PELAEZ BARDALES

Fiscal Supremo
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
PRIMERA FISCALIA SUPREMA PENAL

a fs. 14176/14179, refiere su disconformidad con la pena impuesta señalando que el Colegiado no ha tenido en consideración lo establecido por el Tribunal Constitucional respecto a la pena de Cadena Perpetua; además, que la pena impuesta también resulta ser desproporcionada e incompatible con su función preventiva, protectora y resocializadora, más aún si atendiendo a su avanzada edad no le permitirá reinsertarse a la sociedad; así mismo, sostiene que el Colegiado no ha tenido en consideración su intención de colaborar con la justicia, asumiendo su responsabilidad, acogándose a la Conclusión Anticipada del proceso.

Siendo esto así, este Despacho solamente se pronunciará sobre el aspecto materia de impugnación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo N° 959.

II. IMPUTACIÓN:

Se imputa al procesado **MARIANO CRUZ PONCE o ABRAHAN ANTONIO CHAVEZ PONCE** ser el líder de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas a nivel internacional, integrando el llamado Cartel de Medellín; habiendo trasteado droga y armamento de la zona de Monzón, Tingo María y Aguaytía, por vía terrestre hasta Pucallpa, de donde la trasladaba por vía fluvial, hasta la localidad de Nuevo Perú - Río Putumayo - El Estrecho - Iquitos, donde se encontraba con el principal acopiador de droga para el Cartel de Medellín. Así mismo, se habría determinado que su centro de operaciones se hallaba en Iquitos contando con numerosos agentes y zonas de producción de alcaloides en las localidades de Monzón, Tingo María y Aguaytía; contando con armamento, pertrechos y numerosos vehículos como apoyo logístico y de seguridad; siendo que al momento de su captura, 19 de febrero de 1997, había negociado la venta de armas a agentes de tráfico ilícito de drogas, habiendo intentado sobornar a los efectivos de la policial nacional, para que lo dejen en libertad, con la suma de \$ 1,500.00 dólares americanos.

JOSE ANTONIO PELAEZ BARDALES
Fiscal Supremo

Primera Fiscalía Suprema en lo Penal



Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
PRIMERA FISCALIA SUPREMA PENAL

III. ANÁLISIS:

La defensa del procesado sostiene que la pena impuesta resulta excesiva y desproporcional a los hechos cometidos. Sin embargo, es de señalar que el caso que nos ocupa, envuelve la comisión de una pluralidad de delitos graves, sancionados con penas severas; precisándose que por la data de los hechos, a pesar de encontrarnos ante un concurso real de delitos, no resulta aplicable la sumatoria de penas, por cuanto la norma penal al respecto es de fecha posterior a los hechos imputados, correspondiendo aplicar al caso el Principio de ASPERACIÓN, el cual determina que en estos casos se aplique la pena correspondiente al delito más grave y los demás delitos concurrentes actúan como circunstancias agravantes. En este caso, los delitos más graves imputados son de Tráfico Ilícito de Drogas agravado y Lavado de Activos cuya pena máxima es de 35 años de pena privativa de la libertad.

JOSE ANTONIO PELAEZ BARDALES

Fiscal Supremo

Primera Fiscalía Suprema en lo Penal

De otro lado, se aprecia de los actuados que el condenado se ha sometido a la CONFORMIDAD establecida en la Ley N° 28122, por lo que para la determinación judicial de la pena, debe tenerse en cuenta el criterio vinculante establecido por la Corte Suprema de la República en el nuevo Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116 del 18 de julio del 2008, el cual estipula que a los procesados que se acogen a la institución de la conformidad que regula el Art. 5° de la Ley N° 28122, les corresponde la reducción de la pena en una fracción inferior a un sexto de la pena conminada, ello por aplicación analógica del Art. 47° del Nuevo Código Procesal Penal relativo a la Terminación Anticipada, condición que se presenta en el caso que nos ocupa, por lo que amerita la rebaja proporcional de la pena a 30 años de pena privativa de la libertad.

IV. OPINIÓN FISCAL:

En consecuencia, esta Fiscalía Suprema en lo Penal en representación del Ministerio Público y en uso de las facultades conferidas por ley, es de OPINION que se declare NO HABER NULIDAD en la sentencia que CONDENA a MARIANO CRUZ PONCE o ABRAHAN ANTONIO CHAVEZ PONCE como autor del delito contra la Salud Pública Tráfico Ilícito de Drogas



Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
PRIMERA FISCALIA SUPREMA PENAL

agravado, Lavado de dinero, Corrupción de Funcionarios y Tenencia Ilegal de Armas-, en agravio del Estado, y HABER NULIDAD en el extremo que le impone TREINTA Y CINCO y REFORMANDOLA se le imponga TREINTA AÑOS de pena privativa de libertad, y NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene.

Lima, 19 de julio de 2010.



JOSE ANTONIO PELAEZ BARDALES
Fiscal Supremo
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal

JAPB/TAGV/crcp.

10 ENE. 2011